

VISITA CONJUNTA DE INVESTIGACIÓN A KENIA ABRIL DE 1998

Servicio de Noticias 59/98

ÍNDICE AI: AFR 32/10/98/s

8 DE ABRIL DE 1998

Kenia: hace falta una intervención urgente sobre los derechos humanos

NAIROBI, 8 de abril - Una delegación de tres importantes grupos de derechos humanos ha declarado hoy que Kenia es un «barril de pólvora a punto de explotar» y advirtió al gobierno que dejara de utilizar la táctica de dividir para gobernar, que puede hundir al país más en la violencia.

La delegación de los tres grupos -Amnistía Internacional, ARTÍCULO 19 y *Human Rights Watch*- entrevistó a más de doscientas personas de todos los sectores de la sociedad keniana, incluidos a supervivientes de incidentes violentos y a funcionarios del gobierno keniano. La visita conjunta se realizó tras el declive de la atención internacional hacia las violaciones de derechos humanos que continúan produciéndose en aquel país, dada la gravedad con que las organizaciones ven la situación en keniana.

La delegación halló una situación especialmente seria en el Valle del Rift, donde continúan produciéndose homicidios de forma esporádica tras los recientes ataques masivos. Más de cien personas han perdido la vida y miles de habitantes se han convertido en desplazados desde que estalló por última vez la violencia, en enero de 1998.

«Kenia es un barril de pólvora a punto de explotar, todas las señales están allí -declaró Edge Kanyongolo, portavoz de la delegación, en una conferencia de prensa celebrada hoy en Nairobi-. La espiral de violencia y del odio interétnico está produciendo un aumento de las violaciones de derechos humanos, y esto no terminará hasta que el gobierno deje de utilizar tácticas de dividir para gobernar».

Los supervivientes de la violencia en la zona hablan de una «guerra» en la que los miembros de comunidades antes mixtas se atacan entre sí con flechas y *pangas* (machetes). En la primera oleada de incidentes, en Laikipia, también se utilizaron armas de fuego.

Muchos supervivientes tienen miedo de regresar a sus casas, y hablan de la falta de seguridad en la zona y de la aparente falta de voluntad de las autoridades para prevenir nuevos ataques. El gobierno, de forma sistemática, no investiga ni castiga a los agresores armados, ni protege a los desplazados, asustados y llenos de ira. La delegación de derechos humanos expresó su temor de que los simpatizantes del partido gobernante estén instigando la violencia, al tiempo que culpan de los incidentes a estallidos espontáneos de odio interétnico.

Eran comunes manifestaciones como la que sigue, de un superviviente, lo que destaca que, a menos que se aborden las raíces de la violencia, la gente no regresará a sus casas. El superviviente declaró: «cuando intentamos visitar nuestras casas, recibimos advertencias del tipo de “incluso si cultiváis, estáis perdiendo el tiempo. No comeréis ni siquiera después de sembrar”». Otros expresaron un sentimiento común: «No tengo miedo del pasado ni del presente, sino del futuro».

Esta violencia sigue un modelo establecido en 1991-94, afirmó la delegación, en el que los simpatizantes del partido gobernante, la KANU, atacaron a miembros de los grupos étnicos que consideraban apoyaban a la oposición política. En aquella ocasión se demostró la implicación de altos cargos del gobierno en los hechos. Esta vez hay pruebas fehacientes que indican que los ataques iniciales se organizaron desde fuera de las comunidades.

Los ataques se produjeron únicamente en zonas donde ganó escaños el Partido Democrático, de la oposición. La violencia comenzó a los pocos días de que políticos de la KANU visitaran la zona y amenazaran verbalmente a los simpatizantes del Partido Democrático, que habían presentado recientemente una impugnación legal de los resultados de las elecciones presidenciales.

Estos actos de violencia no se producen en el vacío. Las demandas de un sistema de pluralismo político, en concreto de un proceso constitucional global, reciben como respuesta las peticiones de miembros del partido en el poder de introducir un sistema de federalismo étnico (majimboísmo). Existe el temor de que la forma en que se está proponiendo este sistema pueda utilizarse para despojar de sus derechos a ciertos grupos étnicos.

En 1998, la delegación halló algunas novedades inquietantes, como el uso creciente de armas más complejas, y una nueva tendencia a atacar a las mujeres, víctimas de violaciones y homicidios. Los ancianos y niños tampoco se libran de las agresiones.

La delegación también señaló que esta es la primera vez que miembros de la comunidad kikuyu han respondido a los ataques de forma organizada, ante la pasividad del gobierno. Posteriormente, la oleada de violencia disminuyó, lo que reforzó las peticiones dentro de esa comunidad de tomar represalias armadas para lograr la seguridad.

Sigue habiendo problemas en toda Kenia para tener acceso a información precisa y asequible, en especial en las zonas rurales. La delegación llegó a la conclusión de que este vacío de información proporciona un terreno fértil para aceptar los rumores como hechos y que es imposible la reconciliación en esta atmósfera. El bajo coste de las armas de fuego y la facilidad para obtenerlas sólo puede exacerbar el ciclo de venganzas.

La delegación concluyó que desde 1991, fecha en que el gobierno se vio obligado a introducir un sistema pluripartidista, éste ha ido debilitando la libertad de expresión y contribuido y promovido una cultura de la impunidad y una violencia cada vez mayor, con el fin de minar unas reformas auténticas y significativas. La presión en favor de las reformas se enfrenta continuamente a una combinación de palo y zanahoria, en forma de violencia brutal del Estado atemperada con promesas de cambio.

Más recientemente, las peticiones de un proceso abierto y global de reforma constitucional han provocado que el gobierno amenazase con prohibir a las organizaciones no gubernamentales, y un grave hostigamiento de los activistas de derechos humanos.

Pese a las intervenciones de la comunidad internacional sobre cuestiones relativas a los derechos humanos ante las elecciones de diciembre de 1997, este impulso no ha sido sostenido. Se han saludado como importantes pasos hacia delante pequeñas concesiones de las autoridades que a menudo no se han llevado a la práctica, olvidando la falta de voluntad sistemática del gobierno para promocionar y proteger los derechos de todos los ciudadanos, con independencia de su etnia o afiliación política.

Kenia es parte del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y de la Carta Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos. Amnistía Internacional, ARTÍCULO 19 y *Human Rights Watch* piden al gobierno keniano que prevenga las violaciones de derechos humanos en el futuro, exija responsabilidades a los autores de estas violaciones y defienda la libertad de expresión, de asociación y de reunión. La comunidad internacional debe aumentar la presión sobre el gobierno de Kenia para que respete sus obligaciones legales nacionales e internacionales y supervisar de cerca todas las reformas prometidas utilizando puntos de referencia claramente articulados.

Si desean más información o concertar una entrevista el 8 de abril, pónganse en contacto con Ilana Cravitz en el teléfono +254 2 723 211. Después de esa fecha, pueden llamar a Urmi Shah al teléfono +44 171 713 1995 o a Ilana Cravitz en el teléfono +44 171 278 9292.

Se